

# **La progresividad de los derechos político electorales de las mujeres indígenas**

**Ixel Mendoza Aragón**

## **Introducción**

La construcción democrática en México ha venido evolucionando para tratar de dar cuenta de nuevas realidades que devienen del contexto histórico, incorporando nuevos elementos normativos, a fin de lograr la incorporación total de la ciudadanía mexicana en la vida política.

El principio democrático, por sus propios orígenes y por su percepción pragmática requiere necesariamente de la realización del principio de igualdad; ambos principios van de la mano en un Estado democrático, en tanto más igualdad exista, más democracia se ejerce; eso nos lleva a valorar las desigualdades existentes en el Estado para determinar el grado de democracia de este.

Una de las grandes problemáticas de nuestras sociedades, ha sido extrapolar nuestras diferencias naturales, convirtiéndolas en desigualdades sociales que desembocan en una discriminación injustificada que permea a casi toda nuestra actividad social y sobre todo en el ámbito político, lo que reduce sensiblemente el grado de democracia de un Estado.

La igualdad política es un elemento necesario para la consecución del principio democrático, democracia e igualdad se encuentran íntimamente ligados, son dependientes mutuamente; solo mediante la igualdad política es posible la realización total de la democracia; esta infiere que todas las personas pertenecientes a una comunidad, puedan participar activamente en el gobierno que dirigirá la vida pública de la comunidad, mediante el ejercicio de sus derechos políticos, ya sea ejerciendo el derecho al voto o el derecho a ser elegible a un cargo de elección popular, sin olvidar el derecho de los ciudadanos a formar parte del gobierno en función de sus aptitudes o de ejercitar aquellas prerrogativas políticas que se consagran en la Constitución.

La desigualdad en razón de género es uno de los problemas más recurrentes de la democracia, la diferencia natural entre hombres y mujeres ha sido trasladada al plano político; en las culturas desarrolladas bajo un régimen patriarcal, generalmente, por tradición, se ha

considerado a la mujer un ente inferior al hombre, ideología que aún permea a las sociedades contemporáneas.

Esta problemática arraigada tan profundamente en el Estado mexicano ha tenido como consecuencia la escasa participación de la mujer en la vida política del país; en la actualidad, por la presión que durante décadas han ejercido las mujeres para la reivindicación de sus derechos políticos y por las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en los instrumentos de derecho internacional, como tratados, convenios, protocolos, etc., se ha asumido esta problemática creando normas jurídica internas, que aunadas a la normatividad internacional han contribuido para la incorporación de las mujeres en la vida política del Estado.

Otro de los factores que inciden en la consecución del principio democrático, es la discriminación política por origen, las sociedades modernas han desdeñado la participación de las personas de origen indígena en la vida política del Estado; los pueblos indígenas tradicionalmente han creado sus propias formas de gobierno y autodeterminación, así como sus costumbres propias para la elección de las personas que gobernarán esas comunidades.

Las acciones que ha tomado el Estado Mexicano, están referidas en un primer plano al reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas, mediante el aval de los sistemas normativos indígenas, por los cuales realizan la elección de sus gobernantes; en un segundo plano mediante la implementación de la obligatoriedad de incorporar mujeres y personas indígenas en las postulaciones de los partidos políticos en el sistema de elecciones legisladas, en un tercer plano, con la implementación de acciones afirmativas para ocupar cargos de elección de popular.

Estos dos factores, la desigualdad por género y la desigualdad por origen, aun cuando ya han sido abordados por el Estado, han propiciado la marginación y la discriminación de la mujer indígena de la vida política del país.

En las comunidades indígenas se hace más evidente y aún se vive bajo un sistema patriarcal, en el que el rol de la mujer en la comunidad se circunscribe al ámbito familiar y en algunos casos al ámbito social, pero es completamente relegada del contexto político.

Recientemente en el sistema de elecciones legisladas, se han tomado medidas para incorporar a la mujer indígena a la vida política del Estado, mediante el establecimiento de la obligatoriedad de incluir a personas indígenas en las postulaciones de los partidos políticos, en algunos casos, se agrega la obligatoriedad de la paridad de género en dichas postulaciones, con lo que se garantiza el ejercicio del derecho a ser votado de la mujer indígena.

En ese mismo tenor se han implementado las cuotas en los cargos de elección popular para personas que acreditan ser indígenas, de la misma forma, en algunos casos, estas cuotas están sujetas a la equidad de género, de esta forma se garantiza el acceso de la mujer indígena a las posiciones de toma de decisiones.

El presente trabajo tiene como finalidad describir y analizar la participación política de la mujer indígena en el Estado mexicano, desde la perspectiva de los sistemas electorales establecidos en la Constitución mexicana, a saber, el sistema legislado y el sistema de usos y costumbres, describe y analiza los avances que se han logrado en materia de derechos político-electorales de las mujeres indígenas y la prospectiva en la implementación de la regulación de los sistemas normativos indígenas a fin de armonizarlos con los postulados constitucionales de paridad de género.

### **Los derechos político – electorales de la mujer**

La lucha por los derechos político-electorales de las mujeres ha sido intensa y constante; en México, los derechos a votar y ser votado de las mujeres se implementó el 12 de febrero de 1947, en el ámbito municipal, tras una larga serie de peripecias y sinsabores, no obstante que el Estado mexicano fue creado con la primera constitución de 1824.

Un pequeño avance en el movimiento hacía la ciudadanía de la mujer lo constituyó la adición al artículo 115 constitucional para permitir la participación política de las mexicanas circunscrito al ámbito municipal ( LICONA VITE, 2016, p.37).

Tal proceso principió el 4 de diciembre de 1946, cuando el Presidente Miguel Alemán, considerando la evidente necesidad de que la mujer interviniera en las funciones electorales relativas a la designación de los miembros de los ayuntamientos (tanto para elegir regidores, como para ser nombrada para estos cargos) sometió a la Cámara de Senadores (Cámara de origen) la iniciativa de adición al artículo 115 Constitucional ( LICONA VITE, 2016, p.37).

Seis años después del otorgamiento del derecho a votar y ser votada en el ámbito municipal, vino la reforma constitucional para reconocer ciudadanía integral a la mujer en nuestro país.

El 17 de octubre de 1953, fue publicada en el DOF la reforma a los artículos 34 y 115, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), reconociendo plena ciudadanía a la mujer mexicana. Tal proceso de reforma, con una duración de diez meses, dejó evidenciado que no tendrían que pasar más décadas para reconocer la ciudadanía integral de la (LICONA VITE, 2016, p.59).

Este proceso apuntaló el principio democrático desde el contexto jurídico, sin embargo, una situación diferente se presentó en el contexto social, las objeciones que se esgrimieron contra el reconocimiento de la ciudadanía integral de la mujer aún siguen vigentes en algunos sectores poblacionales.

Las mujeres como parte integrante de un Estado, a partir del reconocimiento de su ciudadanía integral, gozan de esos derechos políticos, incluyendo sus derechos electorales, lo que debiera permitirles participar activamente en los procesos de elección de los gobernantes y como aspirantes a un cargo de elección popular. Estos derechos se encuentran debidamente tutelados en la norma vigente, tanto nacional como internacional.

Los derechos político-electorales se encuentran inmersos en los derechos políticos, aunque ambos están íntimamente ligados implican prerrogativas diferentes que es necesario diferenciar.

Es frecuente distinguir entre derechos político-electorales y otro tipo de derechos políticos, refiriéndose los primeros a aquellos cuyo ejercicio y realización hacen uso de la técnica del voto. Generalmente, la democracia representativa se apoya en dicha técnica, como ocurre con el derecho a votar y ser votado en elecciones populares, pero igualmente varios procedimientos de democracia semi-directa la utilizan, por ejemplo, referendo, plebiscito o revocatoria de mandato. Cuando se participa directamente en los asuntos públicos sin hacer uso de la técnica del voto, se está en presencia de derechos políticos no electorales, como ocurre al desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público para el que se fue nombrado o designado, o bien otros procedimientos de democracia semi-directa, como el cabildo abierto o la iniciativa popular (OROZCO, 2016).

De conformidad con esta inicial clasificación, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, de petición, de réplica, a desempeñar un empleo, cargo o comisión, o el de iniciar leyes conforman el bloque de derechos que, en conjunto, corresponde al ámbito más amplio de los derechos políticos. El derecho a participar en las consultas populares, al sufragio activo y pasivo, en el que recientemente ha encontrado cabida el derecho a una candidatura independiente, el de asociación con fines políticos, a constituir partidos políticos y a afiliarse a un partido forman parte de los derechos que, en conjunto, posibilitan que los ciudadanos participen democráticamente en los asuntos políticos del país a través del voto (ASTUDILLO, 2018, 94).

Los derechos políticos y por ende los derechos político-electorales tienen un carácter universal, entendiendo este inmerso en el principio de igualdad, de tal forma que todas las personas que gozan de las características y calidades que exige la legislación vigente gozan de este derecho y el Estado está obligado a respetarlo y garantizarlo.

Las mujeres, por causa de los usos y costumbres y de la dinámica social preponderante han visto reducido su acceso al ejercicio de estos derechos, la legislación internacional y el derecho interno han implementado medidas para reducir en la mayor medida posible esta brecha diferencial entre hombres y mujeres.

Estas medidas crean derechos diferenciados plenamente justificados que permiten crear condiciones para el acceso a la mujer, sobre todo a los cargos de elección popular

En el ámbito del derecho internacional, el 20 de diciembre de 1952 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los derechos políticos de la mujer, este tratado busca igualar las condiciones entre los hombres y las mujeres para el ejercicio de los derechos políticos, proporcionando una mayor protección a las mujeres; en sus tres primeros artículos se establece el derecho de la mujer a votar y ser votada, así como a ocupar cargos públicos y ejercer las funciones públicas en igualdad de condiciones con los hombres sin ningún tipo de discriminación.

En el derecho interno la mayoría de los países de la urbe han emitido legislaciones, acciones afirmativas y otro tipo de medidas para reducir la desigualdad imperante en el ejercicio de los derechos político-electorales entre hombres y mujeres, no obstante, como se mostrará en

el presente trabajo, estas no han sido suficientes y se remarca aún más en el acceso a las posiciones de toma de decisiones de las mujeres indígenas.

### ***La mujer indígena como sujeto de poder***

En las últimas décadas la representación de las mujeres en los puestos de elección popular en México ha aumentado significativamente, en cumplimiento de los instrumentos internacionales que tutelan los Derechos humanos y los derechos políticos de la mujer y por la presión que han ejercido desde la década de los setentas los movimientos feministas que buscan la reivindicación de la mujer en todos los aspectos de la vida pública y social (HERNÁNDEZ, 2017 P. 48).

A pesar de que en México la representación de las mujeres ha ido en aumento, éstas siguen ocupando un porcentaje menor de escaños en comparación con los hombres. Aún así, a nivel federal, se aprecia un incremento significativo de legisladoras desde el periodo 1988-1991 al más reciente de 2015-2018. En la Cámara de Diputados federal el número de representantes aumentó en un 30.8 por ciento, pasando de 59 en 1988-1991 a 213 diputadas en 2015-2018. En la Cámara de Senadores, en tanto, el incremento es del 17.2 por ciento, pasando de 10 senadoras en 1988-1991 a 42 de 128 legisladores en el último periodo. En el año 2021 se celebraron elecciones federales y actualmente 241 mujeres y 259 hombres intergran la cámara de Diputados, en lo que toca a la cámara de senadores advertimos una paridad de 128.

Es notable que las reformas realizadas a las leyes electorales y la aplicación de las acciones afirmativas en materia de equidad de género, han logrado equilibrar el acceso a las posiciones de poder de las mujeres y los hombres; de los datos estadísticos suministrados destaca que en la elección de los alcaldes sigue siendo desproporcionada la cantidad de hombres que acceden a una alcaldía respecto de las mujeres, esto es así, puesto que esa posición es electa por votación mayoritaria, en donde la elección depende de la voluntad popular, en tanto que las posiciones de regiduría, son electas por representación proporcional y es aquí en donde se han podido implementar la paridad de género.

Las leyes, políticas públicas y las acciones gubernamentales tendientes a implementar la equidad de género, han ido logrando su objetivo, pero, como puede notarse en la elección de presidentes municipales, esa ideología no ha terminado de permear en el grueso de la

población, que aun considera más apto para puestos de toma de decisiones, a un hombre que a una mujer.

Esta circunstancia es aún más notable en las comunidades indígenas en que tradicionalmente la mujer ha sufrido de la discriminación de los hombres, en casi todos los sentidos; se han dado casos excepcionales en algunas comunidades indígenas en que una mujer ha sido electa como presidente municipal.

El tema se vuelve complejo cuando se consideran factores cualitativos relacionados con las formas de ejercicio político y de autogobierno en las comunidades indígenas, en relación con la participación de las mujeres, sobre la cual no hay estudios suficientes. No obstante, los escasos hallazgos encontrados muestran una tradicional discriminación por las mujeres y una escasa participación en el ámbito político y público (ZEGADA, 2012, 52).

En los ayuntamientos, las mujeres cumplen funciones como vocalías, secretarías o cargos relacionados con la vida familiar. Las mujeres son objeto de una serie de sanciones por un comportamiento indebido y tienen que lidiar con violencia física, psicológica, hostigamiento, calumnias, acoso sexual y otros que —como señala Barrera-Bassols— no se limitan a las comunidades indígenas, sino que responden a un comportamiento, a una forma de ser que sanciona la participación de las mujeres y que está fuertemente arraigada (ZEGADA, 2012, 58).

En los sistemas normativos internos la participación política de las mujeres es distinta a la del régimen de partidos. En las comunidades indígenas el ejercicio de los derechos políticos está supeditado a un sistema cívico-religioso de cargos o de escalafón, construido desde una visión patriarcal, en la que las mujeres tienen escasas probabilidades de participar desde el cargo más bajo hasta llegar a presidentas de su comunidad o pueblo. En dicho sistema, para acceder a un cargo se necesita que la asamblea comunitaria nombre a las autoridades municipales, tomando como base su participación y trayectoria en los distintos puestos que ha ocupado (BUSTILLO, 147)

La falta de reconocimiento a la vulnerabilidad específica de las mujeres indígenas por razones de género y la inexistencia de mecanismos efectivos para proteger y promover sus derechos, dentro y fuera de sus colectivos de pertenencia, constituyen importantes barreras contra el

cumplimiento incluso de los derechos reconocidos, de este sector de la población. Obviar y desconocer las relaciones de cooperación y conflicto entre los varones y las mujeres de distintas generaciones, incluyéndolos indistintamente en la figura de “la comunidad” como entidad política, como se hace en muchos de los instrumentos de tutela de derechos indígenas, constituye una forma de invisibilizar las contradicciones y presiones internas y externas sobre este sector y contribuye a reproducir su subordinación (BUSTILLO, 154).

Así, “si bien es cierto que las mujeres indígenas se enfrentan a poderosas ideologías de género arraigadas en el discurso de la tradición, que obstaculizan su participación política en cargos públicos y favorecen su exclusión en la toma de decisiones, también es cierto que, en los últimos tiempos, las mujeres organizadas han desarrollado estrategias para discutir las tradiciones y abrir espacios en las instituciones comunitarias, y las han llevado a cabo con ritmos y maneras diferenciadas” (SIERRA, septiembre-diciembre 2009, pp. 73-88).

Lo que es preocupante es que a pesar de tener un marco jurídico interno e internacional para prevenir y sancionar la discriminación, como dice la doctora en literatura Lucia Melgar en su ensayo discriminación sobre discriminación “la sociedad mexicana sigue arrastrando una pesada carga de prejuicios que inciden en las conductas y relaciones sociales e interpersonales de manera negativa. La herencia colonial, el clasismo, la misoginia y un temor general hacia el otro son algunos de los factores sociales y culturales que han impedido la construcción de una sociedad igualitaria e incluyente (MELGAR, 7).

El sistema electoral legislado ha logrado medianamente equilibrar la desigualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, ya sea mediante la normatividad o mediante la instauración de acciones afirmativas y políticas públicas, pero en el contexto del sistema normativo indígena, pocos avances se han logrado, en este sistema está prácticamente prohibida, por tradición, la participación de la mujer en la elección de sus autoridades.

### ***Retrospectiva de la participación de la mujer indígena en la vida política de México***

En general la mujer indígena en México ha sido relegada de la participación política; son múltiples los factores que han propiciado esta situación de discriminación de la mujer indígena, el sistema patriarcal de las comunidades indígenas, la costumbre, la desvalorización de la mujer, incluso la marginación en los partidos políticos, entre otros. Se han logrado



algunos avances en el devenir de la historia electoral, no obstante, eso, la ausencia de la mujer indígena en la vida política de México sigue siendo una constante.

En cuanto a las comunidades indígenas en general, rigen patrones culturales que ubican a la mujer en una situación ciertamente disminuida respecto a los varones. Existen normas que regulan las relaciones, los matrimonios, los sistemas de parentesco, la división sexual del trabajo (BARRERA-BASSOLS, 2006, 58).

Las mujeres indígenas no gozan de la autonomía que es inherente de las personas, que tiene que ver con los derechos de igualdad, de libertad, en suma, con la digna de la persona.

El acceso a la mujer indígena a las posiciones de toma de decisiones en sus comunidades y municipios ha estado plagado de grandes dificultades, sobre todo familiares y sociales, debido precisamente a esa falta de autonomía que no les permite actuar por voluntad propia, incluso en defensa de sus derechos.

Para la mujer a quien se le ofrece la candidatura de la presidencia municipal, un paso importante a dar es la negociación con su familia, principalmente con el esposo y los hijos e hijas, luego con sus padres, hermanos, hermanas y familia extensa. Es importante que ellos la apoyen porque de otra forma difícilmente triunfará. Salvo raras ocasiones, no aceptan un cargo contra la voluntad del marido. La mayoría de mujeres casadas tiene que pedir permiso o buscar la anuencia de su cónyuge. Ésta es una diferencia entre un hombre y una mujer. El hombre informa su decisión de participar en una candidatura y la mujer pide permiso y negocia, en la familia, su deseo de contribuir políticamente con el municipio. Las mujeres que aspiran a las presidencias municipales o llegan a ellas conocen poco de la historia “secreta” del municipio. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cuáles son los valores sobrentendidos que en el cabildo han ejercido los varones?, ¿cuál es el doble discurso que se acostumbra para mantener a las fuerzas vivas tranquilas?, ¿qué tipo de alianzas se deben perseguir? En resumen, no tienen una capacitación previa en los códigos del poder político. a veces las mujeres tienen sólo una leve impresión de los hilos ocultos del poder, intuyen, pero no los conocen bien, porque son formas masculinas de actuar y resolver conflictos, que no son explícitas y se dan como valores sobrentendidos para los hombres (DALTON, 2012, pp. 156-157).

Se han logrado avances en algunas comunidades indígenas en torno a los derechos de las mujeres indígenas, a pesar de las objeciones culturales; en México, el estado de Oaxaca es un referente en el impulso de la participación política de las mujeres indígenas

El estado de Oaxaca es una entidad federativa en México que cuenta con el mayor número de municipios indígenas, 417 municipios de 570 que conforman la entidad federativa, (<https://www.ieepco.org.mx/sistemas-normativos/municipios-sujetos-al-regimen-de-sistemas-normativos-indigenas-2018>) que se autodeterminan a través de usos y costumbres, es en este estado en que más se han logrado avances en la participación de la mujer indígena en la política.

La primera mujer que fue presidenta municipal en el estado de Oaxaca fue la señora Luisa Clara Chávez en la Mixteca, en 1962, llega a la presidencia municipal de Juxtlahuaca por el asesinato del presidente municipal, la señora clara era regidora por lo que no le correspondía ser la suplente del presidente, pero el cabildo decidió que fuese ella porque no había ningún hombre con el deseo de hacerlo. ,(<https://www.ieepco.org.mx/sistemas-normativos/municipios-sujetos-al-regimen-de-sistemas-normativos-indigenas-2018>).

En 1970 hubo varias presidentas municipales en la mixteca, zona de Oaxaca donde desde la década de 1940, por circunstancias económicas había empezado la población a migrar hacia el norte del país y a los Estados Unidos. Dos fueron de las primeras presidentas del estado, Elasia Edilia Infante Peláez de San Juan Cacahuatpec, distrito de Putla y Margarita Cruz de Matamoros de Santiago Tamazola, ambas durante el periodo de 1976-1978.

En la década de 1980, las mujeres empezaron a posicionarse políticamente en varios municipios del estado. Esto no es, en la mayoría de los casos, como consecuencia de una lucha de las mujeres en la política local, sino el resultado de diversos factores políticos externos: el PRI utiliza una nueva estrategia de reconocimiento a sus mujeres militantes, como respuesta a las nuevas corrientes de pensamiento y acuerdos internacionales celebrados a partir de 1975, momento coyuntural en que, por un lado, se hacen sentir los votos femeninos y las demandas feministas para transformar las leyes sexistas del país y por el otro, la mayoría de los conflictos en el mismo PRI/gobierno, relacionados con la lucha de distintos grupos de poder tiene repercusiones en los municipios de Oaxaca. Se inició la reorganización del sindicato de maestros en el estado, donde participaron muchas mujeres. Coincide también

con nuevas directrices en la Normal de Tamazulapan, en la mixteca. Se manifiesta más activa la lucha y la formación política de los estudiantes y futuros maestros, algunos de los cuales más tarde serán presidentes y presidentas municipales. Es en la década de 1980 cuando las movilizaciones populares crecen en Oaxaca y la lucha abierta contra el partido único. La oposición empieza a consolidarse. En ocasiones, una forma de solucionar estos problemas de a quién elegir entre dos bandos opuestos del mismo partido, es elegir a un tercero, y aparece una mujer como solución al conflicto.

Posteriormente en 1990 en el Municipio de Teotongo, Juana López García, fue nombrada Presidenta Municipal. En 1992, ya establecidas en la Constitución local las elecciones municipales por el régimen de Sistema normativos indígenas, en la región mixteca, Felisa Cruz Fuentes fue electa presidenta municipal en San Juan Yucuita, en los siguientes años algunos municipios más tuvieron este avance de inclusión de las mujeres; sin embargo, el acceso no fue fácil para las que lograron ser nombradas autoridad, como ya lo han documentado ampliamente Dalia Barrera y Blanca Suárez (BARRERA, 2012), no es sencillo llegar al cargo, pero tampoco sostenerse en él. Antes del 2014, la participación de las mujeres en la vida comunitaria-política era parcial o limitada. En los municipios que había una apertura parcial del acceso de las mujeres a la vida política, la costumbre dictaba que éstas no debían ser consideradas para participar en las asambleas; pero sí era posible que les fuera asignado un cargo relacionado con la vida religiosa o participar en algunos comités con la función de organizar y preparar la comida, es decir, aportan capital social; no obstante esas actividades no se encuentran valorizadas de la misma forma que la de un cargo asignado a un hombre, los cuales, no sólo adquieren un valor político, también tiene simbólicamente un nivel jerárquico superior (CÁRDENAS, 2021, 57-71).

A principios de 2015, el Artículo 2 Constitucional fue reformado y se estableció la participación de las mujeres en condiciones de equidad en las elecciones, lo cual intensificó las acciones del referido instituto logrando que, en el 2016, por primera vez los cabildos estuvieran conformados por lo menos con una mujer y a partir de entonces cada vez se han incrementado cabildos conformados de manera paritaria. Recientemente fue aprobada la reforma local en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género

en el Estado de Oaxaca en la que, entre otras propuestas vanguardistas, se estableció como límite el año 2023 para que la paridad en estos municipios sea obligatoria, mientras esto sucede, se deben realizar acciones de sensibilización (CÁRDENAS, 2021, 57-71).

### **Políticas públicas y acciones afirmativas en favor de la participación de las mujeres indígenas en la política**

Las políticas públicas se entienden como “respuestas que el gobierno genera para desvanecer problemas sociales” (ARIAS TORRES, 2012, 41) estas respuestas regularmente no se encuentran reguladas en la normatividad, son ordenamientos que emiten las autoridades legitimadas para ello, a fin de resolver un problema planteado; las políticas públicas discurren en dos vías, que responden a diferentes momentos de su aplicación.

Las acciones afirmativas “Pueden definirse como aquellas acciones cuyo objetivo es borrar o hacer desaparecer la discriminación existente en la actualidad o en el momento de su aplicación, corregir la pasada y evitar la futura, además de crear oportunidades para los sectores subordinados. Se trata de políticas concretas que sirven al objetivo más amplio de igualdad de oportunidades. Y son necesarias para vencer las resistencias al cambio, las dificultades, obstáculos y limitaciones que se levantan por doquier sembradas a diestra y siniestra en el largo y difícil camino hacia una igualdad de oportunidad verdadera” (FERNÁNDEZ, 1997, 6).

En términos reales las acciones afirmativas son disposiciones del Estado dirigidas a personas o grupos definidos de personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante los cuales, se les otorgan derechos diferenciados con la finalidad de reducir la desigualdad social.

Considerando que los derechos políticos no se reducen al sufragio, la exclusión evidente en el ejercicio pleno y activo de la ciudadanía por parte de las mujeres requiere que ellas se encuentren en el mismo punto de partida que los hombres. Para ello, se hacen necesarias acciones tendientes a superar la asimetría ocasionada por una práctica social desigual y discriminatoria, se requiere un trato desigual que tome en cuenta las diferencias. Con ese fin, se adoptan medidas especiales temporales para corregir las condiciones persistentes de la discriminación de hecho, mientras tales condiciones persistan y hasta que se alcance la igualdad de oportunidades y de resultados con respecto a los hombres. Estamos hablando de políticas de diferenciación para la igualdad o medidas de acción afirmativa (también

conocidas como discriminación positiva o inversa), siendo las cuotas de participación política un mecanismo de aplicación (TORRES, enero-junio de 2008, 233)

Las políticas públicas y las acciones afirmativas en pro de la participación de la mujer indígena en la vida política, se ha fundado en las directrices que se establecen tanto en los tratados internacionales, como en la Constitución y la norma secundaria ha llevado a cabo políticas públicas y acciones afirmativas para procurar la participación activa de las mujeres indígenas, esencialmente con políticas de cuotas o cupos.

La Constitución mexicana, siguiendo los postulados de los tratados internacionales, establece el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y por ende los derechos de las personas que se auto adscriben como pertenecientes a las comunidades indígenas, entre esos derechos se encuentra la prerrogativa de autodeterminación mediante los procesos celebrados por usos y costumbres para designar a sus autoridades, sin embargo, los usos y costumbres de los pueblos indígenas regularmente no contemplan la participación política de la mujer.

El derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas no es absoluto, se encuentra acotado a las disposiciones de la propia Constitución, en ella se establecen los principios de igualdad de hombres y mujeres y los derechos político-electorales de todas las personas; cuando las normas consuetudinarias derivadas de los usos y costumbres entran en colisión con la norma suprema o con los tratados internacionales, estos dos últimos debe prevalecer sobre aquellas; en los casos en que los usos y costumbres niegan o reducen sensiblemente los derechos político-electorales de la mujer, aun cuando por ordenamiento de la Constitución se deben conservar en la mayor medida posible los usos y costumbres de los pueblos indígenas, el Estado está obligado a intervenir para tutelar los derechos político-electorales de las mujeres en estas comunidades.

La norma ha sido omisa en la regulación de esta problemática, pero los órganos del Estado han emitido políticas públicas y acciones afirmativas que garanticen, en la mayor medida posible, el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas.

El sistema electoral mexicano se compone de diversos órganos estructurados de forma jerárquica y conforme a la división política de la nación.

Los órganos administrativos electorales, tanto federales como locales, son los entes estatales legitimados para establecer políticas públicas y acciones afirmativas en materia de derechos político-electorales; en ejercicio del principio del federalismo, los órganos federales emiten acuerdos que permean a toda la nación, en el ámbito de los procesos electorales para la elección de Presidente de la República, cámara de diputados y cámara de senadores, regularmente estos acuerdos constituyen directrices para los acuerdos que emiten los órganos administrativos locales, estos últimos instituyen acuerdos en materia electoral que permean el ámbito de su entidad federativa; de ahí que las políticas públicas y las acciones afirmativas, puedan ser diferentes en el ámbito federal y en las entidades federativas.

El acceso a la participación de los pueblos indígenas en la vida política del Estado reviste por lo menos dos sistemas diversos que establecen derechos diferenciados para la participación de los pueblos indígenas en los procesos de elección de las autoridades

Bajo esta vertiente, se consideran dos modalidades diferenciadas. La primera remite a tradiciones comunitarias de los pueblos originarios que articulan los principios de participación electoral y representación política y se expresan en el reconocimiento de sus propios métodos para la selección y renovación de sus autoridades, invariablemente de carácter local o comunitario, o bien para que sean sus representantes en asambleas legislativas. La segunda se refiere a mecanismos convencionales de participación en la competencia por acceder a cargos de elección popular. En esta segunda modalidad se consideran, por una parte, las garantías o facilidades que tienen los pueblos originarios para conformar sus propias fuerzas o agrupaciones políticas y contender a través de ellas por cargos electivos y, por el otro, las que pueden tener para hacerlo a través de cualquier otro partido u organización política. En todo caso, también se identifican algunos incentivos especiales que se les pueden otorgar para contender bajo ciertas condiciones equitativas (NAVARRO, 2021,93-94).

En México, formalmente no se encuentra encuadrada dentro del marco jurídico ninguna disposición expresa sobre la reserva de escaños para representación indígena en el Congreso de la Unión. Ha sido a través de acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral a lo largo de varios años que finalmente en 2017, para efectos de las elecciones para renovar los 500 escaños de

la Cámara de Diputados que se verificaron en 2018, se determinó que en 13 de los 300 distritos en que se divide el país para elegir escaños de mayoría y en los que hubiera mayoría indígena sólo se pudieran postular candidaturas de representantes de sus pueblos y comunidades. De esta forma quedó garantizado que al menos en esos 13 distritos unipersonales se eligieran representantes de las comunidades indígenas. Para fines de las elecciones legislativas de 2021, en que se renovarían los 500 escaños de la Cámara de Diputados, la exigencia de postular candidaturas indígenas se elevó a 21 de los 300 distritos de mayoría, precisando que 11 de ellas debían corresponder a mujeres (<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-ap-12.pdf>).

Para las elecciones en el proceso electoral 2020-2021, el Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/CG18/2021, en cumplimiento de la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial por medio del cual se modifican los criterios para el registro de diputaciones federales.

En este acuerdo se establecen las acciones afirmativas para la inclusión de personas indígenas en las planillas de candidatos a Diputado federal que presentan los partidos políticos, se instituye la postulación obligatoria de personas indígenas en 21 distritos electorales de los 300 en que se divide el país, debiendo postular al menos 11 mujeres, para ser electas por mayoría relativa, que deberán estar distribuidas de manera paritaria.

En cuanto a las diputaciones por representación proporcional, en el acuerdo en comento se estableció que, en sus listas, los partidos políticos deberán postular 9 personas indígenas en proporción a la población indígena y el número de Distritos Electorales indígenas de cada una de ellas, a fin de propiciar su mayor participación y representación política, de las cuales al menos una (1) fórmula deberá ubicarse en los primeros diez (10) lugares de cada lista.

En México, la cámara de diputados se compone de 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa, uno por cada distrito en que se divide la nación, que son designados en función de los votos obtenidos y 200 electos por representación proporcional que son designados en relación con el porcentaje de votación que obtienen los partidos políticos.

Así advertimos que a través de diversos lineamientos y reglamentos los cuales significan un gran avance en la tutela de los derechos político-electorales de las personas indígenas y en la inclusión de la mujer indígena en los procesos electorales, en un estado que se ha caracterizado por sus altos índices de pobreza, marginación y violencia, que sufre constantemente los embates de la delincuencia organizada al grado de tener que crear los grupos de autodefensa, la discriminación y menosprecio a las mujeres era una constante generalizada que se remarcaba aún más en los poblados indígenas.

## **Conclusiones**

En las últimas décadas el estado de derecho en México ha sufrido transformaciones en algunos casos radicales, las reformas constitucionales que han entrado en vigor han transmutado el Estado, redirigiendo su teleología y actualizando la filosofía subyacente de la propia constitución, para armonizarla con el concierto mundial que definen los instrumentos internacionales de los que México es parte.

La reforma más importante se suscitó en el año 2011 con el reconocimiento de los derechos humanos y sus garantías e incorporando los tratados internacionales al derecho interno, con ellos los principios hermenéuticos de los derechos humanos, como el principio pro persona, el principio de interpretación conforme, así como los principios de observancia de los derechos humanos como lo son la interdependencia, la universalidad, indivisibilidad y progresividad.

La inclusión de los principios en el orden constitucional, en palabras de Robert Alexy, optimizan el Estado de Derecho, permitiendo que los postulados relativos a los derechos humanos permeen todo el orden jurídico.

Otra de las grandes transformaciones en México lo constituyó la reforma constitucional del 2001 relativa a los pueblos indígenas, en la que se reconoce la pluriculturalidad del Estado mexicano, proporcionando mayores prerrogativas a los pueblos y a las personas indígenas.

El reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas ha sido un proceso que enfrenta dos visiones del México contemporáneo: la que considera que somos un país mestizo, es decir, monocultural; y la que considera que somos una sociedad pluricultural. La primera está basada en un proyecto de nación que negaba implícitamente la diversidad



cultural, y la segunda se funda en la constatación histórica de la heterogeneidad cultural (GONZÁLEZ, julio-diciembre 2002, 253).

Estas reformas son los pilares de la incorporación de los pueblos indígenas en el concierto político del país y el reconocimiento de la ciudadanía plena de las personas indígenas, sin embargo, continúan siendo inacabadas, no solo por la incompletitud de la norma, sino por las condiciones sociales en que se implementan.

El reconocimiento de los pueblos indígenas corresponde a las entidades federativas, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, este reconocimiento se debe fundamentar en los postulados constitucionales, pero se debe regular de manera más precisa en la normatividad secundaria.

En la práctica, la laxitud de las normas relativas al reconocimiento de las comunidades indígenas y de las personas indígenas ha sido motivo de abuso por parte de los partidos políticos y de los candidatos postulados, auto adscribiéndose como indígenas de manera fraudulenta, a fin de acceder a las cuotas de asignación de cargos de elección popular exclusivas para personas indígenas, lo cual reduce sensiblemente la oportunidad de las personas de origen indígena a participar en la vida política del país, violentando sus derechos político-electorales.

Se considera que el sistema legislado debe incorporar mecanismos más eficientes que permitan atribuir el carácter de indígena a las personas que realmente lo son, a quienes su sentido de identidad los compromete con una comunidad indígena, que permita garantizar la adjudicación de los derechos diferenciados que proporcionan las políticas públicas y las acciones afirmativas a quienes realmente lo requieren.

A lo largo del presente trabajo, se ha puesto en evidencia que el sistema normativo indígena, fundado en los usos y costumbres de las comunidades indígenas, no da cuenta de los derechos específicos, sobre todo de la mujer indígena; los sistemas normativos indígenas, no contemplan la participación activa de la mujer, la transmisión del poder otorgada a través de los mandos, regularmente solo se realiza entre varones, contingentemente se permite la participación de la mujer en las asambleas en que se realiza la elección de las autoridades, pero las mujeres regularmente no son elegibles para esos cargos.

Se considera que si bien la Constitución mexicana reconoce y avala el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, también restringe el ejercicio de ese principio, teniendo como parámetro el marco constitucional, dentro de este parámetro es un elemento esencial la igualdad de género en la participación política, por tanto, aun cuando en las comunidades indígenas se reconozcan los usos y costumbres en su autodeterminación, el Estado debe propiciar y garantizar la participación activa de la mujer indígena en la autodeterminación de la población de la que hacen parte.

La intromisión del Estado en los usos y costumbres de los pueblos indígenas, en este caso, se encuentra plenamente justificada, en virtud de que se trata de los derechos humanos de las mujeres indígenas, los cuales no pueden ser contrariados por los sistemas normativos indígenas.

Se considera necesario que, para avalar los procesos de elección mediante el sistema normativo indígena, el Estado debe condicionarlo a la acreditación de la participación de las mujeres indígenas en esos procesos, no solo en su derecho al voto, sino también en su derecho a ser votadas, es decir, que hubiesen participado como candidatas.

El panorama que se presenta en el sistema electoral legislado, es alentador, la experiencia nos indica que existe una mayor participación de la mujer indígena en la vida política del país; en tanto que en el sistema normativo indígena, la prospectiva no es muy halagadora, los usos y costumbres de los pueblos indígenas proscriben la participación de la mujer, por lo que el Estado debe propiciar y crear las condiciones para cambiar en ese rubro la cosmovisión de los pueblos indígenas; este trabajo debe ser asumido desde una perspectiva multidisciplinaria, no solo desde la óptica jurídica, es esencial plantearlo desde la visión social.

Las medidas que se han tomado para una participación igualitaria en la vida política de México, aunque eficaces en algunos puntos, son temporales, por lo que, la finalidad real es mayor inclusión de las mujeres indígenas en la participación de la vida política, consideradas como tales, personas, en algún momento debemos arribar a la lógica de la visión de la persona como concepto de unidad de género y proscribir la lógica de la participación de hombres y mujeres que dentro de las comunidades indígenas gozan de los mismos derechos en igualdad

de condiciones de manera positiva, pero con gran diferencia y una brecha abismal en la realidad cuando se trata de su participación en los espacios de tomas de decisiones.

Por ello, aun y cuando se logrado de manera progresiva un avance en esta participación, resulta imperioso la concientización de la importancia de salvaguardar los derechos humanos en específico la libre participación activa de las mujeres indígenas en la vida política de la comunidad, del estado y de nuestro país.

Ixel Mendoza Aragón  
Dra. en Derecho  
Magistrada Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Morelos  
ixel.mendoza@hotmail.com

### **Fuentes de información**

#### ***Bibliografía***

ALEXY, R. Derecho y Razón Práctica, Fontamara, México, 1993.

ÁLVAREZ DE LARA, R. M. “Equidad de Género” en Instituciones Sociales en el Constitucionalismo Contemporáneo, Héctor Fix-Zamudio y Diego Valadés (coord.) Universidad Nacional Autónoma de México y El Colegio Nacional, 2ª. Ed., México, 2011.

ARIAS TORRES, D. y ALTER., Entre Políticas Gubernamentales y Políticas Públicas. Análisis del ciclo de las políticas de desarrollo del gobierno del estado de Michoacán, México, 2003-2010, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 2012.

ASTUDILLO, C. El derecho electoral en el federalismo mexicano, Primera edición, Grandes Temas Constitucionales, Secretaría de Cultura Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México, 2018

BARRERA, D. Y SUÁREZ, B., Los desafíos de llegar y ejercer un cargo. Mujeres mexicanas en los albores del siglo XXI, Universidad Autónoma Indígena de México, Sinaloa, 2012.

BUSTILLO MARÍN, R. y GARCÍA SÁNCHEZ, E. I., El derecho a la participación política de las mujeres indígenas: Acceso, ejercicio y protección, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2014.

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, La Participación Política de las Mujeres en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2020.

DALTON, M. Democracia e igualdad en conflicto: las presidentas municipales en Oaxaca, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 2012.

DURAND PONTE, V. M., Prólogo, en: J. Hernández-Díaz, Ciudadanías diferenciadas en un estado multicultural: los usos y costumbres en Oaxaca, Siglo XXI, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, 2007.

HERNÁNDEZ TREJO, N. “¿Las mujeres (también) ganan elecciones! La representación descriptiva de las mujeres en las entidades federativas en México”, en La representación política de las mujeres en México, Flavia Freidenberg (edit), Instituto Nacional Electoral y Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2017.

LICONA VITE, C. Un Siglo de Participación Política de la Mujer en México, (1916-2016), H. Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, México, 2016.

LÓPEZ VENCES, R. B. “Derechos políticos de las mujeres: Retos pendientes” en Hacia la Igualdad Sustantiva en México: Agenda prioritaria, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes (coord.) Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 2019.

MELGAR, L. Discriminación sobre discriminación: una mirada desde la perspectiva de género, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México 2012.

NAVARRO FIERRO, C. M. Estudio sobre mecanismos de inclusión electoral en perspectiva internacional comparada, Instituto Nacional Electoral, México, 2021.

RECONDO, D. La jurisprudencia del TEPJ en elecciones regidas por el derecho consuetudinario, editorial TEPJ, México, 2018.

RODRÍGUEZ ZEPEDA, JESÚS. Igualdad Democrática y no Discriminación, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, México, 2014.

RUBIO LLORENTE, F. La forma del poder. Estudios sobre la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.

SARTORI, G. ¿Qué es la Democracia?, Miguel Ángel González Rodríguez (trad.), México, Tribunal Federal Electoral, Instituto Federal Electoral, 1993.

STAVENHAGEN, RODOLFO, “Pueblos Indígenas: entre clase y nación”, en Los Desafíos de la Interculturalidad, editora Milka Castro-Lucic, editorial LOM, Chile 2004.

ZEGADA CLAURE, M. T. Indígenas y mujeres en la democracia electoral. Análisis comparado, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012.

### ***Revistas***

BARRERA-BASSOLS, D. Mujeres indígenas en el sistema de representación de cargos de elección. El caso de Oaxaca, Revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo, vol. 3, 1 (enero-junio), 2006

BONFIL-SÁNCHEZ, P. Mujeres Indígenas y Derechos en el Marco de las Sociedades Multiétnicas y Pluriculturales de América Latina, Revista Ra Ximhai, enero - abril, año/Vol. 8, Número 1, Universidad Autónoma Indígena de México Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa,

CÁRDENAS ACOSTA, G. y LÓPEZ VENCES, R. B. El Bastón de Mando en las Presidentas Municipales de Oaxaca. Revista Inclusiones Vol. 8 núm. Especial, 2021

FERNÁNDEZ PONCELA, A. M. Las acciones afirmativas en la política. Publicación Feminista Mensual, FEM, año 21, No. 169, abril 1997

GONZÁLEZ GALVÁN, J. AL. La Reforma Constitucional en Materia Indígena, Revista Cuestiones Constitucionales, Número 7, julio-diciembre 2002 , UNAM

LARA ANDRADE, I. V. Problemática del Indigenismo en México en el Transcurso de su Historia, Revista Perfiles de las Ciencias Sociales, Año 2, No. 3, Julio – Diciembre 2014, México, UJAT.

MATEOS GÓMEZ, G. G. Los Usos y Costumbres en Tlaxcala: Un Ir y Venir Histórico, Revista Ciencia Jurídica Universidad de Guanajuato División de Derecho, Política y Gobierno Departamento de Derecho Año 7, núm. 13

SIERRA, M. T., Las mujeres indígenas ante la justicia comunitaria: Perspectivas desde la interculturalidad y los derechos, Revista Desacatos, núm. 31, septiembre-diciembre 2009

TORRES, I. Derechos políticos de las mujeres, acciones afirmativas y paridad, Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, vol. 47, enero-junio de 2008

WALDRON, J. "Basic Equality," NYU School of Law, Public Law Research Paper, núm. 08-6, en <http://ssrn.com/abstract=1311816>

Fuentes electrónicas

ACUERDO INE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS Disponible en internet, <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-ap-12.pdf>,

Gobierno de México, <https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-gobernadoras-diputadas-presidentas-municipales-y-alcaldesas-electas-se-reunen-para-forjar-alianza-por-la-igualdad?idiom=es>,

Instituto Estatal electoral y de Participación Ciudadana, Sistemas normativos indígenas, Catalogo de municipios sujetos al régimen de sistemas normativos indígenas 2018, disponible en internet <https://www.ieepco.org.mx/sistemas-normativos/municipios-sujetos-al-regimen-de-sistemas-normativos-indigenas-2018>, en formato .pdf

MARTÍNEZ COBO, J. R. Estudio del Problema de la discriminación contra las Poblaciones Indígenas, 1982, disponible en internet [https://cendoc.docip.org/collect/cendocdo/index/assoc/HASHe3ed/3187d77a.dir/RapCobo\\_v2\\_ch5defIP\\_es.pdf](https://cendoc.docip.org/collect/cendocdo/index/assoc/HASHe3ed/3187d77a.dir/RapCobo_v2_ch5defIP_es.pdf)

Organismos Públicos Locales, Instituto Nacional Electoral, <https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/opl/> formato HTML, recuperado 18 de diciembre de 2021

OROZCO HENRÍQUEZ, J. DE J. "Comentario al Artículo 35", en Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, vol. VII, SCJN, Cámara de Diputados LXIII Legislatura, Senado de la República LXIII Legislatura, INE, TEPJF, CNDH, UNAM-III, Miguel Ángel Porrúa, 2016, disponible en: <http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxiii/DerPM/VOL9.pdf>

SENTENCIA EXPEDIENTE SUP-RAP-121/2020 Disponible en internet [https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/RAP/121/SUP\\_2020\\_RAP\\_121-945532.pdf](https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/RAP/121/SUP_2020_RAP_121-945532.pdf),

Sistema Político Electoral Mexicano, Instituto Nacional Electoral, disponible en internet, [https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Sistema\\_Politico\\_Electoral\\_Mexicano/](https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Sistema_Politico_Electoral_Mexicano/) formato HTML,

#### Informes

CIDH. Informe No. 67/06. Caso 12.476. Fondo. Oscar Elías Biscet y otros. Cuba. 21 de octubre de 2006, párr. 228; CIDH. Mujeres Indígenas desaparecidas y asesinadas Columbia Británica, Canadá. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 30/14. 21 diciembre 2014, párr. 130; y CIDH. Violencia contra personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América. OAS/Ser.L/V/II.rev.2 Doc. 36. 12 noviembre 2015, párr. 422.

Participación de los Pueblos Indígenas en Elecciones Provinciales 2006-2018, Reporte N° 1, Serie participación política de los pueblos indígenas, Programa para la Igualdad Política Dirección Nacional de Formación Cívica Ciudadana Jurado Nacional de Elecciones

#### Tesis jurisprudenciales

Semanario Judicial de la federación, sexta época, Volumen segunda parte XLIX, página 58, RUBRO: INTERPRETACIÓN Y JURISPRUDENCIA.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 25 y 26. RUBRO: COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia 11/2015, Año 8, Número 16, 2015, páginas 13, 14 y 15. RUBRO: ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES

Tesis: 1a. XLIV/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 645